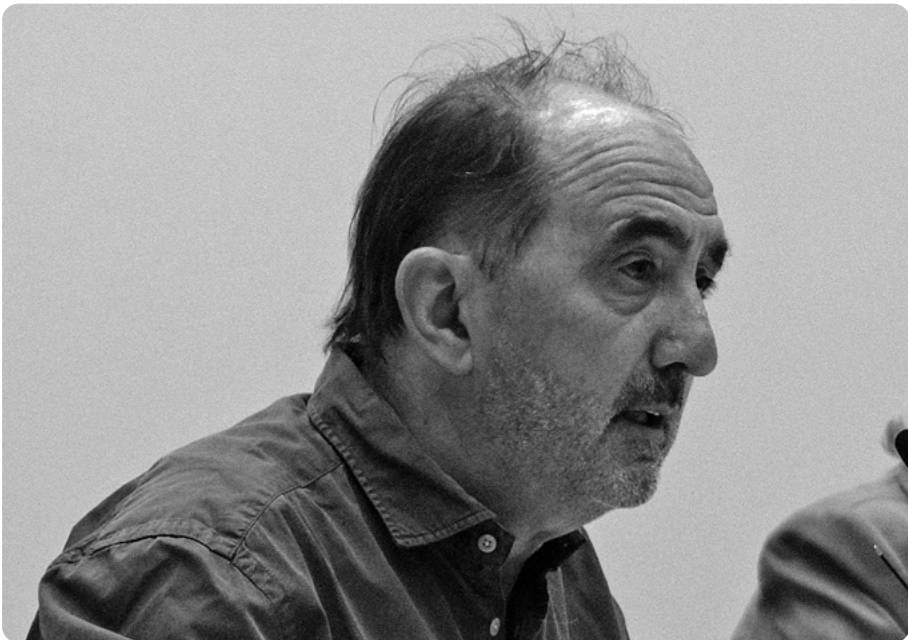




EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DE LAS CRISIS

DANIEL INNERARITY GRAU

Catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque
en la Universidad del País Vasco y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial
y Democracia del Instituto Europeo de Florencia



«A state without the means of some change
is without the means of its conservation»

(Edmund Burke, *Reflexions on the French Revolution*)

A diferencia de otras épocas de la historia, vivimos hoy en (1) una sociedad que no está asediada por enemigos exteriores sino por auto-amenazas. Se trata de crisis y catástrofes como la pandemia, la crisis climática, inundaciones, incendios y sequías que de alguna manera son el resultado de nuestro modo de vida. (2) Creemos saberlo de sobra y tenemos pocas esperanzas en cuanto a nuestra capacidad práctica de hacer lo necesario para acometer estas crisis. Aumenta una sensación de descontrol sobre el mundo, que parece discurrir al margen de nuestra voluntad política, es decir, de nuestra capacidad para gobernarlo, llevar a cabo las transformaciones necesarias, limitar los riesgos y equilibrar su desarrollo. Las crisis actuales tienen lugar en una sociedad que no está desafiada por problemas exteriores, sino que representa un problema para ella misma, por lo que su superación dependería de determinadas transformaciones sociales. Estando así las cosas, en vez de preguntarnos por la naturaleza de las crisis que afectan a nuestra sociedad, deberíamos examinar (1) qué clase de sociedad es esta que genera tales crisis, (2) por qué es tan complicado cambiar incluso cuando la necesidad de cambio es tan obvia y (3) qué deberíamos hacer, no obstante, para aumentar las posibilidades de ese improbable cambio.

1. ¿Qué crisis?

Pero ¿se trata, propiamente hablando, de una crisis? Tal vez no exactamente, si nos atenemos al correcto significado de este concepto. Una crisis es un momento agudo y excepcional, en el que se decide la supervivencia de un organismo o de una institución y tras el cual viene la extinción de quien la padece, se recupera la anterior normalidad o se realizan las transformaciones necesarias para garantizar la propia supervivencia. Algunas de las actuales catástrofes pueden entenderse así, como una crisis más, que tarde o temprano se resuelven con vacunas, ayudas económicas y reparaciones. Pero hay otra parte que no. Existen dimensiones de las crisis que no son transitorias o

excepcionales y en relación con las cuales no tiene sentido hablar de «vuelta a la normalidad».

El sociólogo Bruno Latour expresaba sus buenos deseos afirmando que ojalá estuviéramos únicamente ante una crisis. Quien habla hoy de crisis parece querer tranquilizar mencionando un hecho grave pero pasajero. La metáfora de la crisis alude a un fallo ocasional, dando a entender que fuera de ese aspecto o momento discurre una sociedad estable y equilibrada. La palabra «crisis» es un término que singulariza una situación compleja, la acota en el tiempo, nos ahorra muchos debates y parece dar indicaciones concretas e indiscutibles acerca de lo que debe acometerse. Pero la realidad es muy distinta: los diagnósticos que se hacen están llenos interrogantes y aspectos controvertidos, no hay unanimidad en cuanto a las soluciones y no podemos dar por supuesto que disponemos de los instrumentos adecuados para hacerles frente. No deberíamos engañarnos pensando que solo nos falta decisión y voluntad política. Incluso aunque sepamos a dónde hay que ir, no está del todo claro cómo se hace la transición, si disponemos de los instrumentos adecuados, quién acarrea con los costes, qué intereses y valores deben tener más peso en el balance. ¿Qué debemos sacrificar y hasta qué punto cuando hay una tensión entre los intereses de las diversas generaciones, donde los imperativos económicos y las urgencias sanitarias parecen incompatibles y los viejos debates entre libertad y seguridad o entre crecimiento y sostenibilidad reaparecen con todo su dramatismo? Las soluciones se refieren a cambios en nuestro modo de vivir, pero cuál sea la fórmula para hacerlo no es evidente y está fuera de la lógica habitual de nuestras instituciones, que fueron diseñadas para hacer otro tipo de cosas mucho más simples.

No estamos en medio de una crisis (ni siquiera de varias, como suele asegurarse, por ejemplo, con el término «sindemia»); no vivimos en una sociedad en la que hay contagios sino en una sociedad contagiosa; estamos en un mundo epidémico y no tanto en un mundo en el que irrumpen de vez en cuando las epidemias, de inestabilidad financiera sistémica más que de crisis económicas ocasionales. Creo no exagerar si afirmo que no estamos preparados para vivir y gobernar un mundo en el que no hay crisis, sino que es crítico, cuyas sociedades y gobiernos viven en medio de una inestabilidad mayor de la que son capaces de gestionar. Que la sociedad se encuentre en un estado de crisis permanente no quiere decir que haya muchas crisis, sino que no hay un mundo exterior desde el que nos llegan esas crisis y que es muy improbable que seamos capaces de algo que pudiera calificarse propiamente como su solución. Donde mejor se comprueba esto es en el hecho de que no sabemos cómo ni cuándo se terminan las crisis. Los seres humanos discutimos mucho acerca de la naturaleza de las crisis en las que nos encontramos, pero nos resulta más difícil ponernos de acuerdo acerca de la normalidad a la que deberíamos aspirar,

si esta consiste en lo que está después de la sacudida, si es una recuperación del momento anterior a la crisis o comporta un cambio transformador. Si al menos pudiéramos encontrar algo parecido a un culpable exterior a nuestra sociedad, pero no, el problema es que la sociedad tiene un problema con ella misma. No se trata de meteoritos que caen desde el espacio sino de crisis que producimos con unas prácticas y con unas instituciones con las que tendríamos que solucionarlas. Esa coincidencia entre quien origina tales crisis y quien debería de resolverlas es el verdadero problema a la hora de abordarlas.

Ayudan muy poco a hacerse cargo de la situación aquellas interpretaciones tranquilizantes que entienden las crisis como situaciones provisionales, excepcionales, momentos de cambio o puntos de inflexión, de manera que la inestabilidad financiera, el cambio climático, las pandemias o las crisis políticas fueran cosas que suceden y acaban, sin plantearse que se trata más bien de fenómenos que revelan diversos problemas estructurales en nuestras prácticas sociales. De ahí que tampoco sea muy eficaz ni honesto situarse en esa exterioridad de quien ejerce la crítica social como si no tuviera uno nada que ver con el asunto y como si la dificultad de todo ello se debiera a falta de conocimiento o de voluntad política. Uno puede presentarse como intelectual indignado, militante ecologista e incluso como la reina de Inglaterra que se dice preocupada porque «se habla mucho y no se hace nada»; todo ello son gestos y discursos que pueden hacernos perder de vista que se trata de un fenómeno de gran complejidad y hasta cierto punto ingobernable. Es muy necesaria la crítica, pero esta es más eficaz cuando se realiza teniendo en cuenta las razones por las que personas y sociedades se resisten a cambiar, qué debilidad institucional se pone de manifiesto en unas apelaciones que no terminan de modificar los hábitos que nos llevan a tales situaciones de crisis, por qué los humanos apenas cambiamos cuando sabemos lo que deberíamos hacer, pero nada más, incluso aunque ese conocimiento ofrezca datos irrefutables de que vamos hacia la catástrofe. La crítica social que se despliega con ocasión de cada crisis ha reflexionado muy poco acerca de unos seres que pueden saber lo que hay que hacer y no hacerlo.

La situación es dramática, pero hay que protegerse de cierta épica que conduce a no pocos errores, como por ejemplo las respuestas simples, la identificación de los culpables y la apelación a lo que debe hacerse como una evidencia indiscutible y sustraída del debate democrático. La sociedad del riesgo, como enseñaba Ulrich Beck, es una sociedad en la que, por así decirlo, hay demasiadas cosas conectadas con demasiadas cosas y de un modo que no es fácil de desentrañar, produciendo encadenamientos catastróficos que no se resuelven en relaciones de causa y efecto, sino como resultado de emergencias imprevisibles. Muchas de las crisis que padecemos no se deben a causalidades simples sino a realidades intrincadas. Las crisis tienen lugar actualmente

de un modo rápido y complejo; implican muchas interacciones entre diversas dimensiones de la gobernanza, sin respetar las delimitaciones burocráticas y jurisdiccionales. No es posible establecer una moratoria y resolverlas por partes. Lo que parecía una solución estable se transforma en nuevos problemas que hay que volver a acometer. Todo ello desafía la capacidad adaptativa de nuestros sistemas de gobierno, que proceden básicamente del nacimiento de la democracia moderna, el estado nacional y la revolución industrial: verticales, jerárquicos, segmentados y mecánicos.

Si es difícil comprender e identificar los riesgos que generamos, todavía lo es mucho más gestionarlos. Tenemos que atender a tal cantidad de factores que nuestra capacidad de comprensión y gestión se ve sobrepasada. Interdependencia equivale a dependencia mutua, a intemperie compartida, a protecciones insuficientes, a que no se puede hacer una cosa primero y luego otra, sino que todo debe ser acometido a la vez, de manera que hemos dejado de gozar de la comodidad de la división del trabajo o del principio de primacía de lo propio. Ojalá tuviéramos dilemas o trilemas, en vez de plurilemas. La agenda de una sociedad del riesgo es una agenda de locos.

2. Cambiar la sociedad

La evidencia de que es necesario cambiar no siempre implica la posibilidad de hacerlo. La crisis sanitaria y la climática son un buen ejemplo de ello. La pandemia está vinculada a ciertas formas de interacción social y la dificultad de afrontarla se debe en buena medida a nuestra resistencia a cambiarlas, del mismo modo que la crisis climática es consecuencia de hábitos de producción y consumo que de hecho no estamos dispuestos a modificar en la medida en que sería necesario.

Ahora bien, que las sociedades tienen que cambiar es una exhortación frecuente pero que no suprime la controversia acerca de en qué dirección y de qué modo, si debiéramos darnos prisa o desacelerar y qué es lo que la crisis habría puesto de manifiesto. Resulta todavía más inquietante el hecho de que tal vez, dada nuestra condición y la actual configuración estructural de las sociedades, no estemos en condiciones de hacerlo. Podemos estar de acuerdo en la urgencia de combatir el cambio climático y mostrar las mejores intenciones, pero esa exigencia termina siendo neutralizada por la irrelevancia de los estados, su insuperable diversidad de intereses e incluso por la incapacidad de modificar el consumo individual. Seguramente no nos falten los diagnósticos correctos, ni la voluntad política o el interés de resolver esos problemas, pero el hecho es que nunca estuvimos tan de acuerdo como cuando se decretaron

los confinamientos para contener la pandemia (no sin controversias y resistencias) y la verdadera vuelta a la normalidad ha sido recuperar el desacuerdo en el que habitualmente vivimos.

Nos encontramos en medio de la paradoja de que la sociedad pueda tanto y tan poco al mismo tiempo, que sea capaz de desplegar una potencia tecnológica sin precedentes y apenas consiga garantizar su desarrollo equilibrado en términos jurídicos, sociales o medioambientales, que sea tan poderosa y frágil a la vez. La sociedad es hoy, al mismo tiempo, lo que debe cambiarse y el lugar en el que se generan las mayores resistencias al cambio. Venimos de una civilización que se ha construido en el dualismo de naturaleza y cultura-sociedad, según el cual nuestra condición natural sería inmodificable mientras que la cultura-sociedad sería el reino de la libertad. Estos grandes imaginarios parecen haberse invertido, como asegura Bruno Latour: la naturaleza se ha convertido en una construcción artificial mientras que la sociedad se estanca fuera del alcance de nuestras capacidades de modificación; la naturaleza sería lo maleable y la sociedad lo rígido. Hemos tenido un relativo éxito en proporcionar inmunidad biológica a una parte de la población a través de las vacunas, pero ahora queda lo más difícil: una inmunidad social, es decir, que el resto de los sistemas (educativo, político, económico) consigan que no sucedan crisis tan graves o que nos encuentren mejor preparados y con mayor capacidad para reparar los daños que producen en la sociedad. Parece más fácil escapar de nuestra condición natural que de nuestro condicionamiento social. Por decirlo de una manera un tanto provocativa: es más fácil cambiar de sexo que los roles de género, decidir sobre el hecho natural de la muerte (mediante una ley de eutanasia) que sobre la realidad social de la vejez (con políticas y servicios adecuados).

En el caso concreto de la crisis del coronavirus, la cuestión acerca de los cambios necesarios requiere de entrada examinar si las medidas que se adoptaron en los momentos álgidos de la crisis realizaron ya las modificaciones sociales de fondo que necesitábamos. Mi respuesta es que la excepcionalidad del confinamiento, útil a los efectos de frenar el contagio, no alteró suficientemente las condiciones sociales de la crisis, sino que produjo una ilusión de control. La intensa intervención sobre la sociedad durante el confinamiento extremo ha frenado la extensión del virus (con sus efectos secundarios) y poco más. Como mecanismo de transformación de la sociedad (y de neutralización de las causas que nos han llevado hasta la crisis) la concentración de poder es absolutamente ineficaz. La sociedad vuelve a sus rutinas con pocos aprendizajes significativos. El virus lo agita todo, pero no cambia casi nada; interrumpe muchas cosas, pero modifica muy pocas. La sociedad interpreta la crisis como una anomalía tras la cual hay que restablecer la anterior normalidad. Después del confinamiento hay quien mantuvo un cierto tiempo la ilusión de

que era fácil mantener a raya a la población, que se impusieran las evidencias y los aprendizajes correspondientes, que los estados decretaran los cambios oportunos y estos se produjeran con toda la radicalidad necesaria. Habíamos vivido una experiencia singular de control y docilidad que nos pudo llevar a sacar conclusiones equivocadas. El rápido retorno a los viejos usos y costumbres revela hasta qué punto grandes problemas como el cambio climático o el consumo irresponsable apenas pueden resolverse mediante una intervención directa y centralizada en las rutinas sociales. La continuidad y la repetición son más verosímiles que una alteración, incluso tras la sacudida de una crisis.

El uso de categorías bélicas para entender aquella extraña situación, por inadecuado que sea, responde a que la guerra ha sido el único fenómeno capaz de integrar de un modo similar las fuerzas centrípetas de lo sanitario, lo económico, lo jurídico y lo político. Por eso las guerras han sido un poderoso elemento de integración y construcción de los estados nacionales. Solo en la guerra y en el confinamiento es posible (temporalmente) un control de la sociedad y un alineamiento de sus diferentes lógicas. El confinamiento integró momentáneamente a la sociedad, pero después se volvió enseguida a la lógica de la diferenciación. Unos reclamaban la reapertura de las escuelas, otros la de los comercios o la cultura, otros consideraban que por fin volvían los derechos, y todo ello vivido con una euforia que nos predispuso para la ola de contagios del otoño posterior. La crisis del coronavirus pone de manifiesto que cada actor ha sacado consecuencias distintas y de acuerdo con lógicas diferentes e incluso incompatibles. Vuelve después la diversidad de actores que tienen a su vez que resolver problemas distintos y de un modo que no se deja fácilmente integrar.

En medio de la sacudida de la pandemia se dispararon un montón de expectativas de cambio radical que apuntaban por cierto en direcciones diversas y a veces contrapuestas: hay quien pensó que automáticamente nos íbamos a globalizar o que, por el contrario, se acreditaba el triunfo de lo local; que volvía el estado con todo su esplendor soberano; que el cambio de modelo productivo era inexorable; que dejaríamos de consumir como hasta entonces; que la conciencia ecológica se asentaba de una vez por todas. Pero lo que realmente se está produciendo es una renegociación de todo ello, una mezcla de avances y retrocesos en todos esos asuntos, cuya verdadera dimensión está todavía por definir.

El ejemplo más patético de esta euforia fue la transmutación mágica sin sujeto, programa, ni definición, anunciada por Žižek como un golpe mortal que la naturaleza, no la sociedad, atestaba contra el capitalismo. Esa esperanza de que un golpe del destino haga lo que nosotros deberíamos hacer pone de manifiesto lo poco que confiamos en nuestra propia capacidad de transformación. Compensamos esa incapacidad con la expectativa de que una catástrofe

natural produzca automáticamente lo que debería haber sido en todo caso el resultado de una acción *social*.

Vivimos en sociedades en las que se realiza una curiosa combinación de estabilidad y fragilidad; el estancamiento impide tanto las disrupciones revolucionarias como las transformaciones que nos exigen las crisis que atravesamos. El comportamiento de los humanos y las estructuras sociales no son directamente modificables ni con la rapidez que sería necesaria. La crítica desplegada en los momentos de crisis parece desconocer esta condición social. El discurso crítico suele apelar a la evidencia de que algo debe hacerse y se asombra o indigna de que no se haga, poco interesado en examinar a qué se deben las dificultades de implementación; el problema es que no tenemos un problema de falta de conocimiento sino de capacidad.

La solución a esta dificultad de cambio consistiría en mejorar nuestras capacidades de llevarlo a cabo y no tanto en insistir en su necesidad. La historiadora Hedwig Richter asegura que el afianzamiento de la democracia no se debe a cambios disruptivos sino más bien a pequeños cambios y conquistas evolutivas. Es más fácil exigir cambios instantáneos que posibilitar los cambios graduales. Las mejoras incrementales son menos excitantes que los grandes cambios intencionales, no digamos ya que las transformaciones planificadas o las revoluciones, pero no hay que perder de vista la otra cara de esta moneda: que las conquistas sociales también han de ser protegidas de los cambios sociales bruscos o de las innovaciones tecnológicas irreflexivas. Esa resistencia de las sociedades democráticas al cambio tiene su lado positivo en que son menos vulnerables a las ocurrencias del gobernante de turno o a la irrupción de fuerzas extremistas.

La capacidad de cambiar la sociedad se mejora, de entrada, entendiendo a qué se debe la resistencia al cambio y cómo hacerlo posible. Las estrategias para el gobierno de la sociedad no pueden hacerse contra su complejidad sino siempre aprovechando su dinámica, como hacen ciertos luchadores asiáticos que utilizan la fuerza del adversario, su impulso, para imponerse sobre él. Mejor que obsesionarse con el control de la sociedad es aprender por qué la sociedad se empeña en escaparse a los intentos de controlarla, por qué el orden se transforma con tanta facilidad en dispersión, cuál es la razón de que a toda iniciativa le haga frente una resistencia.

Las formas de vida no suelen ser la consecuencia de decisiones racionales sino el resultado de prácticas asentadas. Nuestro comportamiento cotidiano es tan estable porque es cotidiano. Nuestras acciones (también aquellas que, por ejemplo, favorecen los contagios o dañan el medio ambiente, como ciertas formas de movilidad o de consumo) son reacias al cambio porque se han convertido en hábitos y no han encontrado incentivos suficientes para su

modificación. Para conseguir cambios sociales hay que proporcionar los medios adecuados. Que las personas individuales dejen de coger el coche solo es posible si hay medios públicos de transporte que faciliten los desplazamientos deseados; el tipo de conducta que hemos de mantener para frenar los contagios ha de contar con la información adecuada; transitar hacia una mayor digitalización exigirá una mejor capacitación y ayudas concretas para que nadie se quede atrás. Es cierto que las grandes transformaciones demandan sacrificios, pero la sociedad no los hará si no confía en que habrá una ganancia, personal y colectiva, y que los costes se repartirán equitativamente.

Cuando hablamos de las cosas que nos ha enseñado la pandemia solemos aludir a algo que debe hacerse, pero tal vez es más interesante haber constatado hasta qué punto es difícil cambiar la sociedad y cuál debería ser nuestra actitud ante esa dificultad. Puestos a cambiar la sociedad, deberíamos comenzar entendiendo qué limitada es nuestra capacidad de transformarla, qué insuficiente es el saber del que disponemos.

3. La sociedad disonante

Las democracias tienen dificultades prácticas para la gestión de las crisis pero no porque sean democráticas sino porque están diseñadas para un mundo que en buena parte ya no existe: dan por supuesto que la sociedad continúa pacíficamente diferenciada cuando lo cierto es que está dramáticamente fragmentada, como si estuviéramos en una sociedad mundial compuesta de estados soberanos autosuficientes, que son capaces de unificar criterios y movilizar, cuando en realidad apenas lo consiguen en su interior y con el resto de los estados. Si no entendemos la naturaleza de este anacronismo no podremos hacernos cargo de la crisis de nuestra sociedad.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de una sociedad diferenciada? El éxito de la sociedad moderna se debe a eso que los sociólogos llaman diferenciación funcional y que permite a las esferas de la economía, la política, la sanidad, el derecho o la educación un desarrollo autónomo. Los instrumentos para resolver los diferentes problemas sociales pueden hacerlo únicamente si se respeta su propia lógica: el derecho se resiste a su instrumentalización política; el mercado se emancipa de la tutela política; los creadores culturales se libran de la censura moral; la ciencia puede preocuparse únicamente de la verdad; incluso la religión deja de tener a su cargo el mantenimiento de la cohesión social. Como conquista histórica, el estado nacional consiguió que las evoluciones de cada uno de esos subsistemas se mantuvieran con una cierta congruencia. La verticalidad de la jerarquía institucional era respetada y la provisión eficaz de

bienes públicos que realizaba la burocracia de los estados proporcionaba la legitimidad necesaria para que el sistema resistiera al menos aquellas crisis para las que había sido diseñado (como los conflictos sociales o las guerras). Sobre esta idea elemental se configuró la distinción de poderes, la división del trabajo y la diferenciación de esferas sociales autónomas. Dábamos por entendido que esa configuración de la sociedad nos proporcionaría más libertad y seríamos más productivos; la articulación equilibrada entre todo ello no nos parecía especialmente problemática. Hoy estamos en un contexto muy diferente: hacia dentro y hacia fuera ese equilibrio es puesto a prueba.

Por supuesto que no vamos a renunciar a la diferenciación (que supondría abandonar elementos fundamentales de nuestra cultura política liberal, como la primacía de la ley, la secularización o el carácter abierto de la economía de mercado), ni tampoco a la división del trabajo en la que se basa nuestra productividad o a las lógicas de descentralización sin las cuales peligraría el pluralismo político. Pero actualmente nuestros problemas no proceden de la falta de diferenciación sino de la dificultad de equilibrar esas diferencias. Hoy nos encontramos en una constelación muy distinta de la época gloriosa de los Estados nacionales, pese a los intentos nostálgicos por recuperar aquella congruencia (en clave de Estado para la izquierda o de nación para la derecha). Nuestras crisis sociales son ejemplos de ese desorden: externalidades medioambientales incontrolables, gobiernos que no pueden controlar el precio de la electricidad, poderes ejecutivos que son directamente desafiados por las autoridades judiciales cuando decretan estados de alarma para las crisis sanitarias, un Tribunal Constitucional que no consigue decidir deliberativamente y lo hace por mayoría exigua, es decir, que se convierte en mera correa de transmisión de las divisiones ideológicas de la sociedad, una cogobernanza que no es capaz de conseguir la unidad necesaria respetando al mismo tiempo la pluralidad institucional... Los contrapesos se han convertido en vetos, la división de tareas en fragmentación improductiva, la autonomía de las esferas en autosuficiencia que se desentiende de sus externalidades negativas.

Hay en nuestras sociedades una incongruencia entre la unidad de los discursos y el conflicto generado cuando se trata de llevar esas bellas ideas a la práctica. Todos apelan, con mayor o menor énfasis, a una transformación ecológica; somos conscientes de que hemos de cambiar nuestros hábitos de movilidad, la relación con el territorio, el empleo de los recursos o el consumo, pero inmediatamente se interponen las discrepancias debidas al diferente valor que asignamos a lo económico, lo social o lo ecológico. El impecable eslogan de la OMS «*one health*» (subrayando la coherencia entre salud humana, salud animal y medio ambiente) es un horizonte deseable pero que de hecho solo se realiza en su forma negativa. Nuestro problema fundamental hoy es la configuración de lo común sin anular las diferencias, conseguir una unidad

de acción a partir del pluralismo y la inteligencia distribuida, impedir que la pluralidad de lógicas y perspectivas (por ejemplo, entre la política, la economía y el derecho) se convierta en una trágica incompatibilidad.

Esa fragmentación hace que no haya propiamente un espacio público en el que todas esas diferencias se hagan explícitas y negociables; lo que tenemos es simulacros del estilo de las grandes cumbres climáticas en las que se escenifica por unos días que vivimos en una y la misma sociedad, tanto porque se unifica el liderazgo como la protesta. Una cumbre mundial contra la crisis climática sugiere una unidad de la humanidad que no se da, por los distintos intereses de los países y también por los sectores que se ven más directamente afectados por ciertas estrategias de mitigación: así lo puso de manifiesto la revuelta de los «chalecos amarillos» contra el encarecimiento del diésel en Francia y así se revela en las protestas de los trabajadores de la industria del carbón en Polonia o Rumanía, unas perspectivas sombrías para el mundo del automóvil y las transiciones que pagarán de diferente manera los sectores afectados. Contra lo que suele decirse de que las amenazas compartidas nos unen, ni siquiera los riesgos compartidos suprimen las diferencias en cuanto a la afectación.

La modernidad impugnó la idea de totalidad, la pluralizó, propició la división del poder y la distinción entre lo privado y lo público. El problema al que hoy nos enfrentamos podría formularse así: ¿cómo restablecer una coherencia entre todas esas dimensiones actualmente enfrentadas sin sacrificar las conquistas de libertad que debemos a su separación y sabiendo que ya no podemos contar con autoridades incontestables capaces de unificarlo todo? Descendiendo a casos concretos: ¿cómo traducir evidencias científicas en medidas políticas que consigan una mayoría parlamentaria y, sobre todo, que sean comprendidas por la población? ¿De qué modo equilibrar los imperativos ecológicos y de salud pública con la productividad económica? Muchos de los asuntos que nos han enfrentado tienen su origen en que se ha agudizado esta ruptura entre las diversas lógicas de la sociedad.

La mayor parte de nuestras crisis están causadas porque aquello que en su momento fue una conquista de la modernidad (la libertad de comerciar, producir, cuestionar, desplazarse) se ha convertido en algo disparatado que no atiende a sus posibles consecuencias negativas, como la explotación, la contaminación o la desconfianza. Sabemos que los mercados han resuelto grandes problemas pero han creado otros, como los relativos al medio ambiente; que la democracia es un gran invento en lo que se refiere a la toma de decisiones públicas pero que no nos libra de algunos errores colectivos; que la ciencia y la tecnología realizan increíbles avances que suelen ser «socialmente inexactos»; que el deseable aumento de formación puede llevar a que la ciudadanía sea menos confiada y más contestataria frente a la autoridad pública. No queremos

renunciar a esa productiva división del trabajo y del poder, pero hoy asistimos más bien a su incompatibilidad que a su beneficiosa limitación mutua.

Muchos de los problemas que están en el origen y en la dificultad de gestionar estas catástrofes tienen que ver con las contradicciones de la sociedad contemporánea. En el fondo, estas crisis que ahora irrumpen son crisis que ya teníamos y que no superaremos cuando desaparezca su versión más aguda; quedarán las contradicciones de las que esas irrupciones son su expresión más brutal. Durante la pandemia se hicieron visibles algunas cosas que estaban ocultas por la rutina. Las crisis explícitas suelen ser visibilizaciones de crisis implícitas. Propiamente hablando, la crisis sanitaria (como anteriormente la económica) no puso al mundo en un estado de excepción, sino que reveló hasta qué punto ese mundo se caracterizaba por un conflicto de lógicas diversas, lenguajes que no se entienden entre sí, por la ingobernabilidad, la impotencia de la política, por el contraste entre eficiencia y legitimidad democrática. La crisis de Ucrania ha revelado hasta qué punto somos energéticamente dependientes de Rusia y debería servir para crear unas economías menos vulnerables.

4. Solucionarlo todo para solucionar algo

Entramos demasiado pronto en las crisis y salimos demasiado tarde de ellas, nos sorprende su llegada y nos irrita la tardanza en superarlas. La pregunta acerca de cómo gestionan sus crisis las sociedades actuales debe contestarse indicando qué clase de crisis son estas que no somos capaces de resolver. ¿Dónde reside la dificultad? A que tenemos unas instituciones y unos procedimientos que no están en consonancia con el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Nuestra percepción de la realidad y las estrategias están pensadas para solucionar problemas aislados y bien definidos, pero se ven superadas cuando un problema está entreverado con otros y requiere la colaboración de diversos actores, lógicas e instituciones. El verdadero problema consiste en que es la propia sociedad la que está en crisis porque la gestión de estas crisis se tiene que llevar a cabo en un mundo que es interdependiente, descentralizado, de inteligencia distribuida, radicalmente plural, mientras que sus instituciones todavía no lo son.

Las sociedades contemporáneas no consiguen articular sus diversas lógicas (de lo que ha sido un buen ejemplo la tensión, en medio de la pandemia, entre sanidad, ciencia, economía o educación). El problema es que sabemos hacer más o menos bien cada una de esas cosas, pero no acertamos, por ejemplo, a coordinar las evidencias científicas con las medidas políticas y contando con las instituciones que se ocupan de la legalidad. Se plantean problemas de

incompatibilidad entre eficacia, libertad, igualdad y legalidad, mientras que la pluralidad de actores que intervienen en la gestión de la crisis aparece más como un problema que como una solución.

Una sociedad diferenciada posee una gran capacidad para resolver problemas concretos que atañen a un ámbito específico —la ciencia produjo con gran rapidez vacunas eficaces, las organizaciones se digitalizaron en muy poco tiempo— pero se encuentra con unas mayores dificultades cuando el problema tiene una naturaleza que trasciende esa competencia sectorial y atañe al conjunto de la sociedad, especialmente los efectos laterales que transformaban dichas soluciones en problemas para otros ámbitos: un confinamiento decretado desde el sistema político que daña el funcionamiento de la economía, una ciencia cuyo rápido éxito produce desconfianza en algunos sectores de la sociedad, una digitalización que amenaza otras formas de comercio, una salud epidemiológica que agrava la salud mental, una familia que no está diseñada para que sus miembros vivan mucho tiempo sin otros momentos de diferente relación social... Los criterios de éxito en cada uno de estos ámbitos no coinciden y nuestras crisis son un buen ejemplo de esta disparidad: un éxito económico puede ser un desastre medioambiental, un confinamiento reduce el contagio del virus al tiempo que implica un desastre en términos de desigualdad, se vacuna un determinado país, pero se fracasa a la hora de globalizar la vacunación...

Tenemos unas instituciones que resuelven relativamente bien problemas aislados —de acuerdo con el esquema de la diferenciación—, que fracasan cuando se trata de un problema que implica a varios ámbitos y lógicas sociales y que naufragan estrepitosamente cuando ese problema afecta a la totalidad de la sociedad, es decir, cuando no se trata propiamente de gestionar un problema sino una crisis. En estos momentos las sociedades se encuentran sobrecargadas por la magnitud de la tarea y con unas instituciones diseñadas precisamente para resolver problemas a través de su parcelación (sea la división del trabajo, la lógica administrativa, la separación de poderes o la yuxtaposición de estados soberanos). La enorme capacidad de prestaciones que proporciona la moderna diferenciación funcional se debe a la especialización, a la segmentación y a la renuncia a monopolizar la totalidad social, pero esto mismo representa un problema cuando haría falta tener en cuenta escenarios de interdependencia, visión de conjunto y coordinación.

¿Cómo podríamos resolver ese problema? La dificultad del asunto podría formularse diciendo que si se quiere solucionar algo no hay más remedio que solucionarlo todo. El ejemplo que mejor ilustra esta idea es la necesidad de vacunar a todo el mundo para que la inmunidad sea efectiva. ¿Cómo puede hacerse esto? Es evidente que nadie está en condiciones de solucionarlo todo, pero sí que podemos plantearnos si la solución para nuestro problema singular

no está implicando un problema para otros. Deberíamos estar en condiciones de preguntarnos por el efecto general que pueda tener nuestra solución sectorial, tener en cuenta el todo mientras gestionamos una parcela o competencia concreta.

Se trataría de alinear esos ámbitos que tienden a tener una cortedad de vista y a tomar en cuenta únicamente su propia concepción de la realidad (economía que no interioriza sus externalidades medioambientales, política que únicamente responde ante sus electores, sanidad que cura, pero invierte poco en no tener que curar) sabiendo que esa convergencia será siempre provisional, discutida y revisable. El gran tema de reflexión de las sociedades contemporáneas es la divergencia de lógicas y sus potenciales efectos negativos, los riesgos derivados de no atender a criterios de compatibilidad. Nuestra mayor innovación política consistiría en crear espacios y dinámicas de encuentro y conexión. El sociólogo Armin Nassehi ha proporcionado un bello imperativo categórico para este nuevo mundo en el que la diferenciación y la soberanía han topado con sus límites: «actúa de manera que el otro se pueda acoplar». Acoplarse no significa consenso, sumisión o control, pero rompe también con la lógica de la indiferencia y la externalización. Nos estaríamos refiriendo a todas aquellas operaciones que van desde tener en cuenta la perspectiva de los otros hasta las formas más intensas de reciprocidad, acuerdo, coordinación, cooperación e integración.

Si la verdadera crisis de nuestras sociedades es esta y las catástrofes recurrentes son sus recordatorios, entonces tenemos que abordar los problemas de otra manera, más anticipatoria, holística, transnacional, colaborativa y horizontal; las crisis nos están recordando la necesidad de pensar en una nueva manera de hacer política que sea más receptiva para las formas inéditas que tendrá que adoptar en una sociedad que se hace cada vez más imprevisible.